

Santiago, ocho de julio de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, dictó sentencia definitiva en la cual, en el plano penal, condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Rosa Ester Orellana Contreras, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales y costas de la causa. En tanto, en el ámbito civil, junto con rechazar las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción opuestas por el demandado, acoge la demanda civil formulada por la víctima, condenando al Fisco de Chile al pago de una indemnización de perjuicios ascendente a \$70.000.000.-, más intereses y reajustes fijados en el fallo, sin costas.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión penal impugnada. Por su parte, en lo referente al aspecto civil, se confirma el fallo, con declaración que la indemnización se rebaja al monto de \$50.000.000.-

En contra de esta última sentencia, por parte de los sentenciados, se dedujo un recurso de casación en el fondo. Lo mismo que el actor civil, quien presentó un recurso de casación en la forma y en el fondo, respecto de los cuales se ordenó traer los autos en relación.

**CONSIDERANDO:**



## **I. EN CUANTO AL ASPECTO PENAL.**

**PRIMERO:** Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

*“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.*

*Que, los primeros días de febrero de 1974 la ofendida Rosa Ester Orellana Contreras fue ordenada detener por las autoridades de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI) por su militancia en el Partido Comunista y su calidad de dirigente sindical, lo que se concretó en las proximidades de su lugar de trabajo, siendo conducida por funcionarios militares al Cuartel Silva Palma, lugar en que un grupo de interrogadores organizados y coordinados, también por los mandos militares, con el objeto de que entregare*



*antecedentes acerca de otros dirigentes sindicales y de la ubicación de armas, procedieron a mantenerla encerrada sin orden judicial que lo justificare, interrogarla y torturarla mediante diversas técnicas, entre ellas, aplicación de corriente, quemaduras de cigarrillos en su abdomen, lesiones en las uña de sus manos, diversos golpes en su cuerpo, encontrándose encapuchada o vendada durante dichos interrogatorios, siendo liberada alrededor de tres meses después, sin que haya sido puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes.”.*

**SEGUNDO:** Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Rosa Ester Orellana Contreras, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada.

**TERCERO:** Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad,*



*de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.* Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada, pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de Derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ello, en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política del Estado y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos.

**CUARTO:** Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario



resulta destacar una parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de Derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de Derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de Derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en el estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas. Lo anterior no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa,



pues —como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte— bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al Tribunal de Casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso.

**QUINTO:** Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho de que el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos, pues en sus fundamentos no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado. Lo anterior se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurso pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código citado, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena con relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de Derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado, ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, esto es, el dictado de una sentencia de



reemplazo “conforme a la ley y el mérito de autos”, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado.

## **II. EN CUANTO AL ASPECTO CIVIL.**

**SEXTO:** Que, por parte del apoderado de la demandante civil, se dedujo un recurso de casación en la forma y en el fondo en lo que se refiere a la decisión civil del fallo de segunda instancia.

En cuanto al recurso de casación en la forma, se plantea con base en la causal del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, acusando que el fallo de alzada ha incumplido lo establecido en el artículo 500 N°s 5 y 6 del mismo cuerpo legal. En este caso, reclama por la decisión de rebajar los montos indemnizatorios otorgado a la afectada, obviando que ella estuvo privada de libertad durante noventa y ocho días en el Cuartel Silva Palma de la Armada, lugar en donde recibió descargas de electricidad en diversas partes de su cuerpo, le quemaron el abdomen, le arrancaron las uñas, le propinaron golpes de pies y puños, la abofetearon, todo ello mientras estaba vendada, siendo constantemente amenazada. Así, relata que la afectada quedó con profundas secuelas físicas y psicológicas, desarrollando una profunda depresión, terror, insomnio, trastorno de ansiedad, pesadillas, claustrofobia, crisis nerviosas, inseguridades, temor a estar sola y otras consecuencias típicas de los torturados salvajemente en esa época.

En tal sentido, señala que, pese a estar acreditados dichos padecimientos, el Tribunal de Alzada redujo el monto indemnizatorio otorgado en primera instancia, sin precisar, en definitiva, motivos claros para ello, lo cual conforma un vicio formal de casación establecido en el numerando 9° del artículo 541, en



relación con los numerales 5 y 6, todos del Código de Procedimiento Penal.

En concreto, solicita que se invalide o anule la sentencia impugnada por haber sido dictada con omisión de requisitos legales que importan causales del recurso de casación en la forma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 541 número 9ª, en relación con los artículos 500, números 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal, en los términos en que se ha denunciado y argumentado; infracción que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y acto continuo, pero de forma separada, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo por la cual, confirme en lo pertinente, la sentencia definitiva de primera instancia, con declaración de condenar al Fisco al pago del monto pedido en la demanda o, en subsidio, fijando un monto indemnizatorio acorde al mérito de los fundamentos que obran en el proceso, no inferior al establecido por el Juez de primera instancia, esto es, setenta millones de pesos, o el que se determine; confirmando, en todo lo demás, la decisión definitiva de primer grado.

**SÉPTIMO:** Que, a propósito de la causal invocada, la solicitud de invalidación formal está relacionada con que, a juicio del recurrente, el fallo no habría sido extendido en la forma dispuesta por la ley, asociándolo a la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento, en este caso, a la decisión de rebajar el monto de las indemnizaciones.

En particular, la sentencia de alzada razona sobre el plano civil, señalando que, en consideración a *“su aflicción psicológica y el tiempo durante el cual estuvo privada de libertad, el daño extrapatrimonial se evaluará por esta Corte en la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos)”*. Esta reflexión, desde luego, resulta genérica, al punto que no se alcanza a entender bajo qué parámetros





objetivos y revisables se ha tomado la decisión de reducir la condena patrimonial al Fisco de Chile e, incluso, en cuanto a *la cita de las leyes o de los principios jurídicos en que se funda el fallo*, entre ellos, no se menciona ninguna norma legal concerniente al ámbito patrimonial que justifique la decisión. Más aún, el considerando trigésimo cuarto del fallo de primera instancia deja en claro los motivos por los que, inicialmente, se determinó una suma superior, lo cual resalta la falta de consideraciones esbozadas por la sentencia de alzada y permiten concluir que el laudo en revisión se encuentra incurso en el vicio de casación de forma alegado por el actor civil, esto es, el contemplado en el numeral 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los numerandos 4° y 5° del artículo 500 del mismo cuerpo normativo.

**OCTAVO:** Que, acogándose el recurso de casación en la forma, corresponde tener por no interpuesto el de fondo, según lo prescribe el artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de acuerdo con lo que dispone el artículo 535 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, 544, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se **RESUELVE:**

**EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:**

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.



## EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

II. Que, se **ACOGE** el recurso de casación en la forma interpuesto por el apoderado, don Luis Alberto Díaz Yubero, en contra de la sentencia previamente individualizada, la que, **en el extremo civil**, se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se tiene por no interpuesto el recurso de casación en el fondo.

**Se previene que la Ministra señora Letelier**, aun cuando comparte los razonamientos en torno a la resolución de los recursos de casación analizados, estimó necesario replicar su parecer expresado en las sentencias dictadas por esta Corte en los Roles N° 8.705-2024, 9.256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-2024, 60.327.2024 y 61.017-2024, por ello, estuvo por obrar de oficio en lo que respecta a la negativa de aplicar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entendiendo que el fallo de primera instancia, confirmado por los sentenciadores de segundo grado, no se hace cargo de forma íntegra ni correcta sobre los motivos para descartar la concesión de una pena sustitutiva en favor de los sentenciados, quienes, a la fecha son personas de avanzada edad, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obreque.

Así, de acuerdo con los motivos que pasan a expresarse, a juicio de la Ministra previniente, estimó procedente el otorgamiento de una pena sustitutiva de reclusión domiciliaria, de carácter total y controlada por medio del monitoreo telemático, debido a:



1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa de que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de*



*libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto —la falta de regulación—, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del Derecho Penal o Derecho Penal Ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del Derecho Administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público denominado Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado”.* Asimismo, el mismo autor precisa que *“la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a*



*prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan” (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).*

4º) Que, de igual forma, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV que: *“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.”*. En tanto, el artículo 10, N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *“Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: *“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares*



*mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo” (referencia indicada en el link: [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure\\_on\\_the\\_The\\_UN\\_Standard\\_Minimum\\_the\\_Nelson\\_Mandela\\_Rules-S.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf)).*

**5°)** Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la Corte en su párrafo 350: *“Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la*



*situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares).”.*

**6°)** Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo internacional en la materia, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la Administración de Justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, ello se agrava dado que, en algunas situaciones, ellos padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre la entidad de los crímenes que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido



condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

7º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile





(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

8º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, *tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en los autos en que funda su prevención*, la



situación del enjuiciado Reyes Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal.*

9°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).



En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este punto, como recuerda la autora española doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener*



*sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).*

Así, incluso, en legislaciones que siguen una tradición distinta a las de este lado del mundo, como es el *Common Law*, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, se sigue un postulado similar sobre el particular pues, la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos señala: *“No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, no se infringirán castigos crueles e inusuales”*; todo lo cual ha permitido una variada interpretación por parte del Tribunal Supremo en aras de determinar qué penas reúnen esas características y así descartar su aplicación, lo cual revela lo transversal del rechazo de esta clase de sanciones.

**10º)** Que, bajo las premisas indicadas, se considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1º, letra d), numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *“Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en*



*su casa o en lugares públicos destinados a este objeto*"; todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de la penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Gandulfo; en tanto, la prevención por parte de su autora.

**Rol N° 41.564-2024.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R. y los Abogados Integrantes Sr. Juan Carlos Ferrada B. y Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Llanos, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. Santiago, 08 de julio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 08/07/2025 12:06:07

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 08/07/2025 12:06:07



JUAN CARLO FERRADA BORQUEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/07/2025 12:06:08

EDUARDO NELSON GANDULFO  
RAMIREZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/07/2025 12:06:09



En Santiago, a ocho de julio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, ocho de julio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia en alzada.

**Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:**

1º) Que, en el plano penal, los sentenciados Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Juan de Dios Reyes Basaur, en el acto de notificación rolante a fojas 706 y 724, respectivamente, apelan de la sentencia definitiva dictada en autos, lo cual no precisa los fundamentos de su agravio pero ello puede inferirse, como resultaría lógico, de la decisión condenatoria que le fue impuesta.

2º) Que, al efecto, revisado el fallo en examen se constata cómo de forma correcta se establece el hecho investigado, el cual se califica adecuadamente como un delito de secuestro con grave daño, estableciendo la participación criminal que les corresponde a los sentenciados y que los hace sujetos del reproche penal que adecuadamente se les aplica, de tal manera que el laudo penal dictado por el señor Ministro instructor se encuentra ajustado a derecho.

3º) Que, por parte del Consejo de Defensa del Estado, se deduce un recurso de apelación, el cual plantea la existencia de tres agravios respecto de la condena civil impuesta. Lo primero, cuestiona el rechazo de la excepción de reparación satisfactiva, lo cual está resuelto en el considerando trigésimo tercero, en donde se descarta su procedencia por entender que las reparaciones que conforman el sustento de la excepción resultan prestaciones otorgadas por leyes





de reparación y, por tanto, ellas no limitan el derecho al resarcimiento integral del daño. Enseguida, en lo que respecta al segundo agravio, lo identifica en el rechazo de la excepción de prescripción extintiva, lo que se funda, conforme al razonamiento trigésimo segundo, en la imprescriptibilidad de acción civil por la responsabilidad del Estado en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes y; finalmente, cuestiona que el monto de la indemnización otorgada por daño moral resulta excesivo al no guardar armonía con los montos establecidas por los tribunales, lo cual fuere fijado por el tribunal de primer grado en la suma de setenta millones tal como explica en el considerando trigésimo cuarto, previa indicación de las razones para ello.

**4°)** Que, como ya ha sido una constante en esta materia, las dos excepciones opuestas son rechazadas pues, de partida, existe un principio asentado en esta materia en orden a la necesidad de obtener una reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al actor, lo cual encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

**5°)** Que, también debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los que, de aceptarse la tesis del fallo, quedarían inaplicadas.



Por otra parte, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta además a reglas de Derecho Internacional, los que no pueden ser incumplidos a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

En efecto, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, ya que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce al momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

De esta manera, se trata de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.

La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Así las cosas, y en el contexto descritos, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.



**6°)** Que, en relación con la excepción de reparación satisfactiva, cabe tener presente que no existe una incompatibilidad entre los beneficios que otorgan las leyes las leyes N°19.234, N°19.992, y N°20.874 y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, por lo que no existe motivo alguno para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las referidas leyes no importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. (SCS Rol N° 9755-15 de 21 de junio de 2016; Rol N° 15298-18 de 19 de diciembre de 2018 y Rol N° 15402-18 de 21 de febrero de 2019, Rol 91583-21 de 4 de octubre de 2024).

**7°)** Que, a mayor abundamiento, la historia fidedigna de la ley, que sumada a las características de los beneficios que ella otorga, permite concluir que no se logra el mismo propósito que se persigue con la indemnización demandada en autos, como afirma la sentencia recurrida, pues no se trata de una reparación total del daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado, es que los beneficios pecuniarios obtenidos por la demandante tienen una naturaleza asistencial y por tal motivo, no privan a



las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido, por lo que es manifiesto que no se verificó ningún agravio en esta decisión.

**8°)** Que, en cuanto al error denunciado, en torno a la decisión de rechazar la excepción de prescripción de las acciones civiles extracontractuales deducidas y concluir que éstas son imprescriptibles, negando así la aplicación del instituto de la prescripción como regla general de prescripción extintiva.

Al respecto, debe recordarse que el derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

**9°)** Que, la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).



De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.

**10º)** Que, por último, referente a la determinación del monto fijado por concepto de indemnización, lo cierto es que el considerando trigésimo cuarto detalla los padecimientos y las afecciones acreditadas respecto de la víctima, las que fueron cometidas por agentes del Estado, fijando un monto concordante con esos aspectos, no siendo efectivo que dicha suma no guarde correlación con otras indemnizaciones fijadas en esta materia, al punto que, en otros procesos que ha conocido esta Corte y que se vinculan con causas sobre violación a derechos humanos provenientes del Tribunal de Alzada de Valparaíso, cifras similares han



sido otorgadas a las víctimas, lo que se traduce en una equivalencia no sólo con los hechos sino con otros procesos sobre la misma materia, lo cual permite descartar la impugnación presentada por el Consejo de Defensa del Estado.

**11°)** Que, de esta manera y conforme se viene razonando, se comparte lo expresado por la Fiscalía Judicial.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 16-2016-OVM-Derechos Humanos.

II. Que, se aprueban, asimismo, los sobreseimientos parciales y definitivos consultados de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, que rola a fojas 387, y de fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, que rola a fojas 723, en relación con los acusados Ricardo Riesco Cornejo y Valentín Riquelme Villalobos, respectivamente, en razón de su fallecimiento.

**Decisión adoptada con el voto de la Ministra señora Letelier**, quien, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvo por confirmar el fallo en alzada, con declaración de que, a los sentenciados se les concedía la pena sustitutiva de reclusión domiciliaria, de carácter total y controlada por medio del monitoreo telemático, por el término de la pena impuesta.



**Se previene que los abogados integrantes, señores Ferrada y Gandulfo**, concurre a ambas decisiones, no obstante, en el plano civil, no comparte lo afirmado en el considerando 5° de la sentencia de reemplazo, ya que, en su opinión, tal como lo ha afirmado la amplia jurisprudencia de esta Excm. Corte, el sistema general de responsabilidad del Estado en nuestro Derecho, configurado a partir de lo establecido en los artículos 7° de la Constitución Política de la República, 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 2314 del Código Civil, es por falta o culpa, lo que exige acreditar en juicio ésta para imputarle responsabilidad a aquel, sin perjuicio de no ser exigible la culpa o dolo del funcionario específico que hubiere cometido la actuación irregular que genera el daño. Sólo excepcionalmente el legislador ha dispuesto supuestos de responsabilidad objetiva del Estado, configurando ésta como título de imputación sin que concurra ilicitud de actuación estatal.

Que, en el caso concreto, la responsabilidad estatal en materia de violación a derechos fundamentales comparte el mismo régimen jurídico general, no existiendo en la legislación nacional ni en los tratados internacionales norma alguna que establezca la responsabilidad objetiva del Estado, exigiendo entonces siempre la actuación irregular de éste, ya sea derivada de la falta o culpa de la organización o de un funcionario público específico. Obviamente, tratándose de la responsabilidad del Estado derivada de la comisión de estos graves ilícitos, como en este caso, ésta se configura a partir de la conducta punible de los funcionarios condenados, estableciéndose precisamente la responsabilidad de aquel a partir de esta actuación dolosa.



Redacción a cargo del Abogado Integrante, señor Gandulfo y la disidencia y  
prevención por sus autores.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

**Rol N°41.564-2024.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los  
Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa  
Letelier R. y los Abogados Integrantes Sr. Juan Carlos Ferrada B. y Sr. Eduardo  
Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Llanos, no obstante haber estado en la vista y  
en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. Santiago, 08 de julio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 08/07/2025 12:06:10

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 08/07/2025 12:06:11

JUAN CARLO FERRADA BORQUEZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/07/2025 12:06:11

EDUARDO NELSON GANDULFO  
RAMIREZ  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 08/07/2025 12:06:12





En Santiago, a ocho de julio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

